

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO NOVENO DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019).

Referencia: 110013335 009 2018 00088 00
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)
Demandado: Alfonso Hernando Prieto

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LESIVIDAD
CUADERNO 2 –MEDIDA CAUTELAR-
(Deniega)

Procede el despacho a resolver la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo, según la parte demandante contenida en la Resolución GNR 026928 del 07 de marzo de 2013 proferida por COLPENSIONES.

I. CUESTIÓN PREVIA

De la revisión exhaustiva del expediente administrativo aportado por la entidad demandante en medio magnético, se observó que la resolución que se demanda en el asunto de la referencia, fue objeto de recurso de reposición y en subsidio recurso de apelación, los cuales se decidieron mediante las resoluciones GNR 192379 del 25 de julio de 2013 y VPB 18169 del 17 de octubre de 2014 respectivamente, que al estar vigentes en el ordenamiento jurídico, también deben ser controvertidas, sin embargo en el libelo demandatorio no se hizo alusión alguna respecto de las mismas.

De esta forma, en virtud del principio de preclusión¹ y en aras de evitar futuras nulidades, se entenderán demandados en su integridad, además

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto del 26 de septiembre de 2013 rad: 08001-23-333-004-2012-00173-01(20135), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

"En ese orden de ideas, en virtud del principio de preclusión, si a la hora de la admisión de la demanda el Juez pasa por alto alguna irregularidad, le precluye la facultad de volver al estudio sobre lo mismo, toda vez que en cualquier otra etapa del proceso debe ejercer el control de legalidad para sanear los vicios que acarreen nulidades o fallos inhibitorios o cualquiera otra irregularidad, salvo, naturalmente, aquellos que no fueron alegados y se entiendan ya superados,

de la Resolución GNR 026928 del 07 de marzo de 2013, los actos administrativos GNR 192379 del 25 de julio de 2013 y VPB 18169 del 17 de octubre de 2014, a través de los cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos por la parte demandada contra la resolución GNR 026928 pluricitada.

II. ANTECEDENTES

1. En el acápite –MEDIDAS CAUTELARES– de la demanda, el apoderado de la entidad solicitó suspender provisionalmente la resolución GNR 026928 del 07 de marzo de 2013, antes señaladas, y adicionalmente, solicitud que se hará extensiva por esta judicatura, a las resoluciones GNR 192379 del 25 de julio de 2013 y VPB 18169 del 17 de octubre de 2014.

2. Esos actos administrativos, evidencian que al 01 de abril de 1994, fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993, el demandado tenía más de 40 años de edad, y contaba con un total de requisito necesario para acceder al derecho al reconocimiento de la pensión de vejez con el régimen de transición, según lo ordenado en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1003, que prevé:

<<ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

(...)>>

con el fin de garantizar el efectivo acceso a la administración de justicia y la celeridad en el trámite judicial”.

En consideración a lo antes señalado, la entidad demandante reconoció al demandado la pensión de vejez con el régimen de transición, mediante la Resolución GNR 026928 del 07 de marzo de 2018, objeto de demanda en el asunto de la referencia.

3. El despacho admitió la demanda mediante proveído del 13 de agosto de 2018 (fls. 32 - 33 C ppal), y por auto de la misma fecha ordenó correr traslado (fl. 18 C2); dicho término se suspendió hasta tanto no se le notificara de la actuación al demandado, quien se notificó por aviso el 07 de mayo de 2019 (fl. 81 C ppal).

4. La apoderada de la parte demandada se opuso a la solicitud de medida cautelar (fls. 19 - 20 C 2), toda vez que la misma no cumple con los requisitos previstos en el CPACA, la medida cautelar es temeraria e ilegal, puesto que el derecho pensional es incontrovertible, toda vez que su poderdante se encuentra cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto, indicó que al 01 de abril de 1993 el señor Alfonso Prieto contaba con más de 40 años de edad y tenía más de 15 años de servicios, en consecuencia el estudio pensional efectuado está ajustado a derecho, como se contempló en la resolución demandada y en los actos administrativos que resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la misma, y en caso de haber una confusión, no es imputable al demandado, y no debe afectar sus derechos fundamentales, pues los errores de la administración no deben constituirse en carga para el administrado.

Aunado a lo anterior, aseveró que la mesada pensional constituye el único soporte económico familiar de su poderdante.

III. CONSIDERACIONES

1. Se advierte desde ya que la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo demandado será denegada, toda vez que de la revisión de la documental aportada por COLPENSIONES en medio magnético, se verifica que entre los requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 para acceder a la pensión de vejez con el régimen de transición, está la edad de los 40 años a la entrada en vigencia de la mentada ley, requisito que en efecto cumple el demandante, y aunque no cumpliera los 15 años de servicio, para tener acceso a ese régimen de

transición, la norma es clara al establecer que el beneficiario debe cumplir con uno u otro requisito, y no con los dos a cabalidad.

2. De esta manera, el despacho no encuentra que se afecte la estabilidad financiera de la entidad, aun cuando los efectos de los actos administrativos se suspendieran con las resoluciones que se demandan, y sólo se pretende es el reintegro de unos dineros que se cancelaron como pensión de vejez ordinaria.

Por lo tanto de la confrontación de los actos administrativos y la estabilidad financiera de la entidad, no se puede deducir la contradicción entre ellos en esta etapa procesal, lo que es necesario para acceder a la medida de suspensión provisional².

3. Por lo anterior, el despacho considera que no cuenta con elemento de convicción, suficiente para evidenciar una contradicción de la resolución que se pretende suspender provisionalmente en los efectos, que por lo aducido está ajustada a la legalidad, a simple vista no se desvirtúa la presunción de legalidad con los argumentos expuestos por el apoderado de la demandante y este es uno de los requisitos de apariencia de buen derecho (art. 231 CPACA).

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno Administrativo –Sección Segunda- del Circuito Judicial de Bogotá

RESUELVE

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos Resoluciones GNR 026928 del 07 de marzo de 2013, GNR 192379 del 25 de julio de 2013, y, VPB 18169 del 17 de octubre de 2014, proferidas por COLPENSIONES, por no satisfacer los requisitos de ley.

SEGUNDO: RECONOCER personería a la abogada **Martha Patricia Loaiza Castiblanco** identificada con cédula de ciudadanía 51.915.949 y tarjeta profesional 71.649 del C.S. de la J., como apoderada de la parte

² Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos (...)"

Nulidad y restablecimiento del derecho – lesividad


Expediente: 11001333 5009 201800088 00

Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)

Demandado: Alfonso Hernando Prieto Guasca

demandada en los términos y para los fines del poder que obra en el folio 106 del cuaderno principal.

NOTIFÍQUESE Y CÚPLASE.


GUILLERMO POVEDA PERDOMO
Juez

SCVE

**JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ DC, SECCIÓN SEGUNDA**

NOTIFICACION POR ESTADO

El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha **VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019)** a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.

SARA CRISTINA VILLOTA ESCANDÓN
Secretaria

